

**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA  
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
SECCIÓN TERCERA**

RECURSO Nº: 238/2017

PARTES: ARRINS, S.L. Y GRUPO FSM VERTISPANIA, S.L.  
C/ GENERALITAT DE CATALUNYA Y AJUNTAMENT DE RUBI

**S E N T E N C I A N º 1622**

**Ilustrísimos Señores:**

**Presidente**

**D. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS.**

**Magistrados**

**D. FRANCISCO LÓPEZ VÁZQUEZ.**

**Dña. LAURA MESTRES ESTRUCH.**

BARCELONA, a dos de junio de dos mil veinte.

Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el recurso contencioso administrativo nº 238/2017, seguido a instancia de las entidades ARRINS, S.L. y GRUPO FSM VERTISPANIA, S.L., representadas por el Procurador Don ANGEL MONTERO BRUSELL, contra la GENERALITAT DE CATALUNTA representada por el LLETAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA y contra el AJUNTAMENT DE RUBI, representado por el Procurador Don FRANCESC RUIZ CASTELL, en su cualidad de parte codemandada, sobre Disposición General-Urbanismo-Planeamiento.

En el presente recurso contencioso administrativo ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don **Manuel Táboas Bentanachs**.

## ANTECEDENTES DE HECHO.

1º.- El 15 de diciembre de 2016 la Comissió d'Urbanisme de Barcelona adoptó Acuerdo por virtud del que, en esencia, se aprobó definitivamente el Plan Especial urbanístico de regulación de las actividades extractivas y de su restauración del municipio de Rubí.

2º.- Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el presente recurso contencioso administrativo, el que admitido a trámite se publicó anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente, y recibido el expediente administrativo le fue entregado y dedujo escrito de demanda, en el que tras consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó solicitando que se dictase Sentencia estimatoria de la demanda articulada. Se pidió el recibimiento del pleito a prueba.

3º.- Conferido traslado a las partes demandada y codemandada, éstas contestaron la demanda, en la que tras consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimaron de aplicación, solicitaron la desestimación de las pretensiones de la parte actora.

4º.- Recibidos los autos a prueba, se practicaron las pertinentes con el resultado que obra en autos.

5º.- Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que las partes evacuaron haciendo las alegaciones que estimaron de aplicación; se señaló día y hora para votación y fallo el día 16 de marzo de 2020, y finalmente esta Sentencia se ha podido ultimar y firmar en el día de hoy.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO.

**PRIMERO.-** El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión anulatoria ejercitada a nombre de las entidades **ARRINS, S.L.** y **GRUPO FSM VERTISPANIA, S.L.** contra el Acuerdo de 15 de diciembre de 2016 de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de la **GENERALITAT DE CATALUNYA** por virtud del que, en esencia, se aprobó definitivamente el Plan Especial urbanístico de regulación de las actividades extractivas y de su restauración del municipio de Rubí.

En el presente proceso ha comparecido el **AYUNTAMIENTO DE RUBÍ**.

**SEGUNDO.-** La parte actora, en una larguísima y desmesurada demanda de 124 folios, junto con 33 folios de conclusiones, relaciona los antecedentes que ha estimado de interés y en especial la aprobación inicial de la figura de planeamiento promovida a su instancia acaecida a 13 de diciembre de 2012 y la suspensión de tramitaciones para otra figura de planeamiento promovida por la Administración municipal para la que se han seguido nuestros autos 237/2017 y cuestiona la legalidad de los pronunciamientos administrativos impugnados en el presente proceso, sustancialmente, en las siguientes perspectivas:

1.- No se ha justificado la necesidad de formular un Plan Especial no previsto por el Plan General cuando éste ya regula las actividades extractivas en su artículos 44 y siguientes. Y cuando la actividad extractiva en suelo no urbanizable no tiene carácter excepcional, que no existe un número desproporcionado de actividades extractivas en Rubí, que la actividad no genera conflictividad medioambiental, que no existe agravamiento por la utilización de depósitos controlados en los espacios resultantes de las actividades extractivas, que no se comparte que muchas actividades de esa naturaleza están a punto de agotar su ciclo, que puedan provocar un fuerte impacto, que exista urgencia en esa regulación por situación de alarma social y que no existe un adecuado control al respecto.

2.- Se alega desviación de poder en el sentido que de lo que se ha tratado es de evitar el depósito de Can Balasch bien en atención a la licencia otorgada por el Ayuntamiento a 2012 bien en razón al Plan especial de iniciativa privada que se ha ido tramitando.

3.- El artículo 17 de la Normativa Urbanística vulnera el artículo 68.9 del Decreto 305/2006 que aprueba el Reglamento de Urbanismo en lo que hace referencia a depósitos controlados de residuos clase II y III y puesto que no concurren circunstancias específicas que justifiquen tal prohibición. Se niega la concurrencia de acumulación excesiva de depósitos controlados, la dificultad de mantenimiento de la calidad del aire, escasez del suelo antropizado y la imposibilidad de mantener distancias adecuadas a núcleos urbanos. Igualmente se alega la vulneración del artículo 9.8 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña.

4.- Se impugna el artículo 39 de las Normas Urbanísticas ya que si bien se alude a los efectos resultantes de nuestra Sentencia de 20 de enero de 2012, recaída en nuestros autos 281/2011, se indica la interpretación desviada que persigue la Administración Municipal.

5.- Improcedencia de la ordenación urbanística contenida en el Plan Especial que se inmiscuye en otros ordenamientos sectoriales. Así en los artículos 3, 6 último párrafo, 16.a) y b), 22.a) y b), 18 último párrafo, 29 penúltimo párrafo, 33 in fine, 7, 8, 17 párrafos primero y cuarto, 18, 23, 19 último párrafo y 30, 31, 33 primer párrafo en relación con el artículo 29 primer párrafo, 34, 35 primer párrafo, 39 cuarto y quinto párrafo y artículo 40.

Las Administraciones demandadas contradicen los argumentos de la parte actora.

**TERCERO.-** Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas por las partes contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se cuenta –con especial mención de las obrantes en los correspondientes ramos de prueba y singularmente el Informe emitido por los técnicos Don Luis Fructuoso Barea, Geólogo y Doña Margarita García Bosch, Ingeniera Agrónoma, elegidos por la parte actora y la prueba pericial de designación judicial practicada por el Ingeniero Agrónomo Don Josep Maria Franquet i Bernis y la documental de que se dispone-, debe señalarse que la decisión del presente caso deriva de lo siguiente:

1.- Como se ha aludido a la tramitación de **nuestros autos 237/2017, baste indicar que en esta instancia ha recaído nuestra Sentencia nº 1183, de 12 de marzo de 2020** a la que procede remitirnos a sus dictados y a lo que finalmente resulte de las vías impugnatorias que contra la misma se insten, eso sí, dejando constancia de lo argumentado en la misma en los siguientes términos:

**"PRIMERO.-** El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión anulatoria ejercitada a nombre de las entidades **ARRINS S.L. Y GRUPO FSM VERTISPANIA S.L.** contra el Acuerdo de 15 de diciembre de 2016 la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de la **GENERALITAT DE CATALUNYA** por virtud el que, en esencia, se mantuvo la suspensión de la tramitación del Plan Especial urbanístico para la creación de un sistema urbanístico destinado a infraestructura de gestión de residuos de Can Carreras y Can Balasch promovido por ARRINS S.L. Y GRUPO FSM VERTISPANIA S.L. hasta el cumplimiento de determinadas prescripciones.

En el presente proceso ha comparecido el **AYUNTAMIENTO DE RUBI.**

**SEGUNDO.-** La parte actora que relaciona los antecedentes que ha estimado de interés y en especial la aprobación inicial de la figura de planeamiento promovida a su instancia acaecida a 13 de diciembre de 2012 y la suspensión de tramitaciones para otra figura de planeamiento promovida por la Administración municipal operada a 29 de septiembre de 2014 y a 15 de septiembre de 2015 cuestiona la legalidad de los pronunciamientos administrativos impugnados en el presente proceso, sustancialmente, haciendo valer la falta de motivación del acuerdo impugnado cuando el plan promovido por la parte actora tiene un alcance supramunicipal y el municipal solo es de alcance municipal.

El mismo día 15 de diciembre de 2016 se aprueba definitivamente el Plan Especial

urbanístico de regulación de las actividades extractivas y su restauración de Rubí promovido por el Ayuntamiento de Rubí que se ha impugnado por la parte actora en nuestros autos 238/2017.

La Administración demandada contradice los argumentos de la parte actora.

**TERCERO.-** Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas por las partes contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se cuenta —con especial mención de las obrantes en los correspondientes ramos de prueba y singularmente la documental de que se dispone—, debe señalarse que la decisión del presente caso deriva de lo siguiente:

1.- Centrado el supuesto a enjuiciar en la falta de motivación de la Administración deberá traerse a colación la doctrina jurisprudencial sobre la materia y por todas baste la cita de la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª Sección 5ª de 21 de junio de 2017 y las que en ella se citan del siguiente modo:

"Entre otras muchas, en las SSTS 20 de septiembre y 15 de noviembre de 2012 hemos expuesto: "La exigencia de motivación de los actos administrativos constituye una constante de nuestro ordenamiento jurídico y así lo proclama el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (antes, artículo 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 ---hoy 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administración Públicas (LPAC)---, teniendo por finalidad la de que el interesado conozca los motivos que conducen a la resolución de la Administración, con el fin, en su caso, de poder rebatirlos en la forma procedimental regulada al efecto. Motivación que, a su vez, es consecuencia de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad enunciados por el apartado 3 del artículo 9 Constitución Española (CE) y que también, desde otra perspectiva, puede considerarse como una exigencia constitucional impuesta no sólo por el artículo 24.2 CE, sino también por el artículo 103 (principio de legalidad en la actuación administrativa). Por su parte, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el Consejo Europeo de Niza de 8/10 de diciembre de 2000 incluye dentro de su artículo 41, dedicado al "Derecho a una buena Administración", entre otros particulares, "la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones". Tal precepto se integra hoy en el Tratado de la Unión Europea (Tratado de Lisboa), de 13 de diciembre de 2007, ratificado por Instrumento de 26 de diciembre de 2008, que en su artículo 6 señala que, en su artículo 6 dispone que "La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados".

Como dijimos en nuestra STS de 30 de septiembre de 2011, dictada en el Recurso de Casación 1294/2008, que cita otras anteriores "(s)on acertadas, pues, las consideraciones que se contienen en la sentencia del Tribunal a quo sobre la necesidad de que las potestades de planeamiento estén subordinadas y encaminadas a la consecución del interés general, compatibles con la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo en la que, de forma reiterada, queda señalado que las potestades de planeamiento urbanístico se atribuyen por el ordenamiento jurídico con la finalidad de que la ordenación resultante, en el diseño de los espacios habitables, de sus usos y de sus equipamientos, y de las perspectivas de su desarrollo, ampliación o expansión, sirva con objetividad los intereses generales, de manera racional, evitando la especulación ---sirvan de muestra las SSTS de 24 de marzo de 2009 (casación 10055/2004), 30 de octubre de 2007 (casación 5957/2003) y 26 de julio de 2006 (casación 2393/2003)---. (...) Siendo esto así, en tales modificaciones la exigencia de la motivación y justificación de la mejora para el interés general reviste una especial exigencia, como dijimos en la STS de 16 de diciembre de 2010 (Recurso de Casación 5716/2006)...".

Por su parte, y en relación con la auténtica naturaleza de tal motivación, en el ámbito urbanístico, en la STS de 28 de septiembre de 2012 expresamos:

"Quizás se parte, en las resoluciones impugnadas en la instancia, de una premisa inexacta como es considerar que la falta de justificación en ese cambio de clasificación urbanística es un mero defecto formal que puede subsanarse "a posteriori" tras la nulidad declarada judicialmente. Conviene reparar a estos efectos que esa carencia reviste un carácter esencial y sustantivo pues afecta a la comprensión e impugnación del propio cambio normativo. Y sabido es que los trámites tienen un carácter medial o instrumental al servicio de una finalidad que en este caso, insistimos, se conecta con las garantías del ciudadano y la relevancia del medio ambiente, atendida la naturaleza del cambio de clasificación realizado. No resulta preciso insistir, en este sentido, en la importancia, trascendencia y garantía que para los ciudadanos tiene la justificación expresada en la memoria del plan, para dar sentido a las

determinaciones urbanísticas que introduce o modifica el planificador, como sucede con el cambio de clasificación de suelo no urbanizable de especial protección a suelo urbanizable. Únicamente puede combatirse aquello que se conoce y cuando se comprenden las razones por las que se realiza tal innovación. Y con mayor intensidad si ello tiene repercusión significativa sobre el medio ambiente".

2.- En el presente caso nos ocupa un relevante supuesto que se va dando en el sentido que ante actividades extractivas, en funcionamiento o no, lo verdaderamente decisivo y determinante es redirigir el acento a actividades de gestión de residuos que en su caso inciden en la restauración que correspondía.

No se trata de abordar una infraestructura de gestión de residuos sin más, sino de aprovechar la existencia de una actividad extractiva con su resultancia y sin perjuicio de lo que haya sido o deba ser el programa de restauración que se haya establecido para incidir en el vacío de la extracción para atender a una gestión de residuos y redirigir la actividad la restauración a esos objetivos ya desde el planeamiento para alcanzar en su momento a los correspondientes títulos habilitantes.

Desde esa perspectiva importa destacar las sustanciales diferencias entre los casos que se enfrentan, así el supuesto que se presenta por la parte actora es el ceñido a una ubicación – Can Carreres Can Balasch- para atender a una finalidad supramunicipal pero en contemplación a depósito de residuos y en cambio la propuesta municipal recayendo solo en el ámbito municipal contempla el conjunto de actividades extractivas, de restauración y de depósito de residuos.

En los complejos de partida no resulta suficiente solo centrar el caso en la órbita supralocal y local como se pretende. Antes bien, interesa no perder de vista la decantada finalidad de depósito individualizado de residuos de la propuesta de la parte privada actora y de la íntegra consideración de unas actividades extractivas, de restauración y de gestión de residuos que por más énfasis que se haga en su localización municipal a no dudarlo no debe olvidarse que igualmente se entrelazan el ejercicio de competencias autonómicas y locales. Y todo ello al punto que tanto en uno como en otro supuesto brilla con luz propia que debe estarse, cuanto menos, a un sano espíritu de coherencia y unidad de criterio en las ordenaciones que se produzcan.

3.- Expuesto lo anterior y en las dos vías que se han seguido, interesa dejar sentado que una es de iniciativa particular y otra de la administración municipal. La primera centrada en un supuesto de manifestado interés de depósito supralocal y la segunda para el conjunto de actividades extractivas, de restauración y de depósito de residuos de iniciativa municipal pero en ambos casos. Y en todo caso en ambos casos cuanto menos con incidencia en el ejercicio de competencias municipales y autonómicas para actividades extractivas y de restauración y de gestión de residuos en la que categoría y naturaleza que proceda. Y así en esa tesitura resulta especialmente patente que en el pronunciamiento discutido de suspensión y de ajuste a lo que se decida en sede del planeamiento municipal de oficio es atendible.

Podrán citarse posicionamientos dubitativos de algunos informes pero desde la órbita de la motivación ésta existe, es cognoscible y con la mirada puesta en la compatibilidad de ordenaciones en liza como así se indica y con un refrendo mínimo y suficiente a los presentes efectos respecto al ejercicio de las competencias municipales y autonómicas que se hallan en la esencia de las actividades extractivas, de restauración y de gestión de residuos y que a no dudarlo obligan a una consideración integral de lo que se trata de planificar.

Y todo ello, claro está sin perjuicio de lo que haya lugar a resolver en sede de el Plan Especial urbanístico de regulación de las actividades extractivas y su restauración de Rubí promovido por el Ayuntamiento de Rubí que se ha impugnado por la parte actora en nuestros autos 238/2017.

Por todo ello procede desestimar el presente recurso contencioso administrativo en la forma y términos que se fijarán en la parte dispositiva.

**QUINTO.-** No se aprecia mala fe o temeridad en los litigantes y estimando que en el presente caso concurren atendibles dudas de hecho y de derecho para la resolución del caso en atención a los motivos de impugnación que se han ido argumentando con anterioridad y las posiciones inclusive favorables a las tesis de la parte actora en informes que se han citado por las partes, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998, no procede condenar en costas a ninguna de las partes.

### FALLAMOS

**DESESTIMAMOS** el presente recurso contencioso administrativo interpuesto a nombre de las entidades **ARRINS S.L. Y GRUPO FSM VERTISPANIA S.L.** contra el Acuerdo de 15 de diciembre de 2016 la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de la **GENERALITAT DE CATALUNYA** por virtud el que, en esencia, se mantuvo la suspensión de la tramitación del Plan Especial urbanístico para la creación de un sistema urbanístico destinado a infraestructura de gestión de residuos de Can Carreras y Can Balasch promovido por ARRINS S.L. Y GRUPO FSM VERTISPANIA S.L. hasta el cumplimiento de determinadas prescripciones, del tenor explicitado con anterioridad, y **DESESTIMAMOS** la demanda articulada.

Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas”.

2.- Como las partes reconocen el Plan General de Ordenación Urbana de Rubí aparece destacado en su ordenación en el artículo 2.i) de la Normativa urbanística del Plan Especial impugnado del siguiente modo:

- i) El Pla general d'ordenació urbana de Rubí (en endavant, PGOU) aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en data 10 de desembre de 1986. La C.U.B. va donar conformitat al Text Refós de les Normes Urbanístiques en sessió de data 22 de setembre de 2005. Desenvolupant en concret les disposicions del **CAPÍTOL NOVÉ** del **TÍTOL PRIMER**, relatiu a la **"REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRACTIVES"**.

Y la temática que plantea radica sustancialmente en si la concreta ordenación que se ha efectuado está justificada debidamente.

En este punto interesa señalar que en la tramitación seguida constan las dudas que surgen a la Administración Autonómica ya desde el informe previo a la aprobación provisional respecto al régimen de limitaciones que se trataban de establecer al poder ser excesivamente restrictivas y que hiciesen inviable "de facto" el desarrollo de nuevas actividades al punto de tener que respetarse lo previsto en el artículo 68.9 del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento de la Ley de urbanismo, en cuanto dispone:

“68.9. Las determinaciones del plan de ordenación urbanística municipal en suelo no urbanizable no pueden comportar prohibiciones genéricas de la implantación de actuaciones específicas de interés público o de actividades de explotación de recursos naturales, en la totalidad del suelo no urbanizable, salvo que concurren circunstancias específicas en el municipio que lo justifiquen”.

Y todo ello, a no dudarlo, en la medida que no hay posibilidad de implantación de depósitos de residuos de los tipos II y III y que para los de tipo I solo se detecta que se han reducido las implantaciones a una sola situada donde actualmente hay la actividad extractiva de Can Balasch.

Es así que el centro del debate debe centrarse en si concurren circunstancias específicas que justifiquen el régimen establecido y que finalmente se apuntan hacia los extremos sobre los que ha versado la prueba pericial y singularmente la practicada de designación judicial. Así para con la acumulación excesiva de depósitos controlados en el término municipal, la dificultad específica de mantenimiento de la cualidad del aire, la escasez del territorio no antropizado y la imposibilidad del mantenimiento de distancias adecuadas a núcleos urbanos.

Pues bien, centrada de tal forma la controversia litigiosa, el convencimiento se decanta y recae en los mismos términos que se señalan en la prueba pericial de designación judicial que es la que goza de las máximas garantías procesales y en el sentido que se han establecido tal cúmulo de limitaciones sin justificación técnica atendible que no hay posibilidad de implantación de depósitos de residuos de los tipos II y III y que para los de tipo I solo se detecta que se han reducido las implantaciones a una sola situada donde actualmente hay la actividad extractiva de Can Balasch pero hasta el extremo de comprometerse su apertura.

Siendo ello así bien se puede comprender que vuelve a ocuparnos un supuesto en el que sin acreditarse técnica y razonablemente la improcedencia de los usos que se tratan de evitar –así en especial los de depósito de residuos- lisa y llanamente se despejan en la realidad a otras ubicaciones municipales en un sinsentido jurídico patente sobre todo cuando de reiterarse por todos esa perspectiva la resultancia que se alcanzaría se comenta por sí misma.

Ya en este punto procede estimar la demanda articulada con **la nulidad del plan en su conjunto.**

3.- No obstante lo anterior y para dar respuesta al cúmulo de impugnaciones efectuadas por la parte actora interesa destacar el desconcierto en la cita de artículos que se exponen que no guardan ni una relación por el número de artículo y si la tiene y existe este tribunal no la alcanza por lo que seguirá el orden de los artículos impugnados como se verá seguidamente.

En todo caso interesa traer a colación la pluralidad de ordenamientos sectoriales que se consideran y a tener en cuenta como se relaciona en el artículo 2 de la Normativa Urbanística del siguiente modo:

**article 2 Marc legal de referència**

Sota la cobertura del mandat constitucional de l'article 45 CE i de les directrius europees més recents, el marc normatiu de referència d'aquest Pla Especial a títol il·lustratiu, és el següent:

- a) La normativa urbanística (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per Llei 3/2012, de 22 de febrer i per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica; Decret 305/2006, de 18 de juliol que aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme i el Decret 64/2014, de 13 de maig, que aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística).
- b) La normativa de prevenció i control ambiental de les activitats (Llei 20/2009, de 4 de desembre) i normativa reglamentaria de desenvolupament.
- c) La normativa específica sobre activitats extractives estatal (Llei 22/1973, de 21 de juliol, modificada per RD Legislatiu 1303/1986, de 28 de juny, d'adaptació al dret de les comunitats europees del títol VIII sobre condicions per a ser titular de drets miners; Llei 54/1980, de 5 de novembre de modificació de l'esmentada Llei 22/1973 en relació als recursos minerals energètics; RD 2857/1978, de 25 d'abril, que aprova el Reglament general pel règim de la mineria i RD 107/1995, de 27 de gener, pel qual es fixen els criteris de valoració per a configurar la secció A) de la Llei de mines) i autonòmica (Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s'estableixen normes addicionals de protecció dels espais d'interès natural afectats per activitats extractives).
- d) La normativa específica sobre residus i la seva gestió a nivell estatal i comunitari (RD 1481/2001, de 27 de desembre, que regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador; l'esmentada Directiva 2008/98/CE, del Parlament i el Consell, de 19 de novembre, sobre residus i derogació d'altres Directives; llei 5/2013, de 11 de juny, per la que es modifiquen la llei 16/2002, de 1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats; i Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament de emissions industrials y de desenvolupament de la dita llei 16/2002) i a nivell autonòmic (el Programa de Gestió de Residus Industrials a Catalunya –PROGRIC; el DL 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de residus i el Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats).
- e) La normativa sobre paisatge (Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Decret 343/2006, de 19 de setembre de desenvolupament de la Llei anterior i que regula els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística; el Conveni Europeu del Paisatge aprovat el 26 de novembre de 2007 i la Carta del Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, aprovada l'11 de desembre de 2014).

- f) La normativa sobre mobilitat referida a la Llei 9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat, i Decret 344/2006, del 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada
- g) La normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes (especialment, la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre i les regles aplicables fins a l'adaptació de la Llei 6/2009, de 28 d'abril a l'anterior que estableix la Disposició Addicional Vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica).
- h) El Pla Territorial Metropolità (en endavant, PTMB) aprovat definitivament pel govern de Catalunya en data 20 d'abril de 2010, que inclou les prescripcions relatives a "Espais Oberts" que afecta al Terme municipal de Rubí.
- i) El Pla general d'ordenació urbana de Rubí (en endavant, PGOU) aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en data 10 de desembre de 1986. La C.U.B. va donar conformitat al Text Refós de les Normes Urbanístiques en sessió de data 22 de setembre de 2005. Desenvolupant en concret les disposicions del CAPÍTOL NOVE del TÍTOL PRIMER, relatiu a la "REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRACTIVES".
- j) El Pla Especial i Catàleg de patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural de Rubí, aprovat el 12 de març de 2004.

Todo ello dispensa mayores citas con posterioridad pero interesa advertir que por hallarnos en sede de planeamiento urbanístico no puede desconocerse que procede ceñirse a la técnica urbanística y a su naturaleza sin que sean dables a título de ese planeamiento urbanístico desarrollos de otros ordenamientos sectoriales no ajustados a sus correspondientes disposiciones generales reglamentarias, ordenanzas sectoriales de su razón y de sus correspondientes títulos habilitantes.

4.- Se impugnan los artículos 3 y 6 último párrafo de la Normativa Urbanística que disponen:

#### **article 3 Objecte de la Normativa**

El present Pla Especial té el doble objecte de regular l'obertura, explotació i restauració tant de les activitats extractives, com dels dipòsits controlats en el sòl no urbanitzable de Rubí considerant els següents moments:

- Obertura de noves activitats: en funció de l'emplaçament i de les seves característiques (tipus d'explotació, molèsties específiques generades pel material extret o dipositat, el transport, etc)
- Explotació: determinant les mesures correctores necessàries i els controls possibles per a minimitzar els impactes al medi ambient o a les persones durant la vida útil de l'explotació.
- Ampliació de llicències concedides: en funció de l'emplaçament de les ampliacions projectades i del correcte compliment de les condicions d'obertura i explotació inicials i de les mesures correctores de l'explotació.
- Restauració de les explotacions amb definició de terminis, controls i garanties. Determinació de morfologia, materials de replert i qualitat de la restauració.

El Pla també contempla un règim transitori per a les activitats existents amb llicències en vigor que es respecten en tant no sigui necessari modificar les condicions en que es van atorgar. No obstant, la regulació transitoria sí que incorpora mesures per reduir les molèsties derivades de l'explotació, limitacions o terminis de caducitat per evitar que les instal·lacions puguin estar aturades durant períodes indefinits, així com previsions sobre la qualitat i els terminis de la restauració.

**article 6 Actes regulats en aquesta normativa**

Les activitats extractives de qualsevol mena així com els dipòsits controlats estan subjectes a llicència urbanística municipal preceptiva, sense perjudici de la necessària autorització d'altres entitats i organismes d'acord amb la legislació sectorial i de control ambiental.

En el cas de nova obertura o ampliació d'una activitat extractiva o de dipòsit controlat de residus és exigible, com a condició per tramitar l'esmentada llicència urbanística, la prèvia aprovació d'un Pla especial o Projecte d'actuació específica d'acord amb allò que disposen els articles 47 i següents del TRLUC i 46 i següents del Decret 64/2014, que aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Tant els plans especials o projectes d'actuació específica, com les llicències urbanístiques municipals hauran de verificar el compliment de les determinacions contingudes en aquest Pla especial per a cadascun dels moments que s'enumeren a continuació:

- Obertura i/o ampliació d'activitats extractives
- Seguiment i control d'activitats extractives
- Obertura i/o ampliació de dipòsits controlats.
- Seguiment i control de dipòsits controlats.
- Tancament d'activitats extractives i dels dipòsits controlats.

Los precitados artículos son disconformes a derecho y nulos habida cuenta que lejos de ajustarse a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico urbanístico bien para obras bien para usos urbanísticos se trata de penetrar sustancialmente en la naturaleza de las actividades o/y si así se prefiere de las titulaciones medioambientales siguiendo una técnica sustancialmente medioambiental de tracto sucesivo en sintonía con la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, bien para actividades extractivas (sic) bien para actividades de depósitos controlados (sic) sin sujetarse a sus desarrollos reglamentarios e involucrando improcedentemente a una figura de planeamiento urbanístico especial en un cometido que no le es propio.

Por consiguiente igualmente **son nulos los artículos 3 y 6 último párrafo de la Normativa Urbanística.**

5.- Se impugna el artículo 7 de la Normativa Urbanística relativo al establecimiento de garantías para actividades extractivas (sic) y de depósitos controlados (sic) como condición de eficacia de licencias urbanísticas y de aplicación del derecho sancionador urbanístico, en cuanto dispone:

**article 7 Garanties**

En el cas de les activitats extractives, per garantir la possible intervenció municipal preventiva prevista en l'apartat 2 de l'article 8 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambientals d'activitats i la reparació dels danys que es puguin ocasionar als espais públics i/o naturals del municipi, sense perjudici de les garanties que puguin exigir altres administracions o entitats intervinents, la llicència urbanística preceptiva exigirà, com a condició d'eficàcia, la prestació d'una garantia mínima del 12% del pressupost global de restauració.

En el cas dels dipòsits controlats, amb els mateixos objectius descrits en el paràgraf anterior, i sense perjudici de les garanties que puguin exigir altres administracions o entitats intervinents, la llicència urbanística preceptiva exigirà, com a condició d'eficàcia, la prestació d'una garantia mínima del 12% (si és un dipòsit de classe I), del 25% (si és dipòsit de classe II) i del 50% (si és dipòsit de classe III), del cost econòmic dels treballs de restauració previstos en el corresponent projecte.

En cas d'incompliment de terminis i/o condicions de la restauració l'ajuntament instarà a l'administració que correspongui per tal que executi les obres previstes de forma subsidiària a càrrec de l'entitat explotadora i incoarà el corresponent expedient sancionador segons estableix el DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Igualmente cabe estimar que el planeamiento urbanístico no es el instrumento reglamentario de desarrollo de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control de actividades, no existe cobertura legal alguna al respecto en el ordenamiento sectorial que se cita a estos efectos, tampoco existe cobertura jurídica en el ordenamiento urbanístico para alterar la naturaleza reglada de las titulaciones urbanísticas con tamaño condición de eficacia y menos aún cabe remitir al ordenamiento urbanístico de protección de la legalidad urbanística –de restauración y sancionador- el incumplimiento de obligaciones de otro ordenamiento sectorial.

Por consiguiente igualmente **es nulo el artículo 7 de la Normativa Urbanística.**

6.- Se impugna el artículo 8 de la Normativa Urbanística relativo al establecimiento de límites de superficie máxima para actividades extractivas (sic) y de depósitos controlados (sic) en cuanto dispone:

**article 8 Limitació per superfície del màxim d'activitats extractives i dipòsits controlats en el municipi**

Donat que els efectes negatius sobre la qualitat ambiental de les activitats regulades per aquest Pla Especial s'acumulen quan augmenta el nombre d'activitats o la dimensió d'aquestes, s'estableixen uns límits superficials en els següents termes:

- a) Quan a la superfície total d'activitats extractives, no restaurades (excloses les que disposin d'autorització de dipòsit controlat) , amb autoritzacions de les administracions competents en vigor (autorització ambiental del departament de Territori i Sostenibilitat o declaració d'impacte ambiental amb autorització substantiva de la DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA, MINES I SEGURETAT INDUSTRIAL en el cas d'autoritzacions posteriors a desembre de 2009, i llicència urbanística municipal), excedeixi les 25 Has es limitaran les activitats referides segons els següents criteris:
- No es podran sol·licitar llicències d'obertura de noves activitats extractives en tot el terme municipal.
  - Es podran sol·licitar llicències d'ampliació activitats extractives sempre que es justifiqui que el front d'explotació (definit a l'article 4 d'aquesta normativa) de l'activitat que es vol ampliar sigui inferior a 2,5 Has.
- b) Quan a la superfície total dels dipòsits controlats, no restaurats, autoritzada pel departament de Territori i Sostenibilitat i/o per l'Ajuntament de Rubí, excedeixi les 15 Has es limitaran els nous dipòsits segons els següents criteris:
- No es podran sol·licitar noves llicències per a dipòsits controlats en tot el terme municipal.
  - Es podran sol·licitar llicències d'ampliació per a restauracions d'activitats extractives mitjançant dipòsits controlats sempre que es justifiqui que el front no restaurat del dipòsit (superfície autoritzada menys superfície restaurada) que es vol ampliar sigui inferior a 2,5 Has.

La estimación de la nulidad que se pretende en este artículo descansa en los mismos términos que la falta de justificación que se ha argumentado en general en el anterior apartado 2, tampoco en el ordenamiento sectorial de actividades extractivas o de depósito de residuos.

Por consiguiente igualmente **es nulo el artículo 8 de la Normativa Urbanística.**

7.- Se impugna el artículo 16.a) y b) de la Normativa Urbanística para actividades extractivas (sic) en cuanto dispone:

**article 16 Llicència urbanística.**

a) Sol·licitud

Sens perjudici de les previsions contingudes als articles 6 i 8 d'aquesta normativa, la sol·licitud de llicència urbanística per a l'obertura d'explotacions extractives haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

- Memòria específica per a la sol·licitud de llicència urbanística que contempli els aspectes que s'enumeren al paràgraf segon d'aquest article.
- Plànol de situació que justifiqui el compliment de l'establert a l'article 11 i a l'0 d'aquesta normativa.
- Plànol de l'àmbit d'extracció.
- Plànol de l'estructura de la propietat, representant les finques registrals i cadastrals i els propietaris de cadascuna.
- Projecte de l'explotació (el mateix de la sol·licitud de l'autorització ambiental)

- Projectes d'obra de les instal·lacions fixes (amb descripció específica dels sistemes de sanejament) i de les intervencions en els accessos i recorreguts fins a les vies de comunicació supramunicipals més properes que seran utilitzades per l'evacuació dels materials.
- Estudi geològic referent a la delimitació de l'espai de l'explotació que determini la profunditat en tots els punts de l'àmbit d'extracció i en funció de la hidrogeologia local, per a demostrar que l'extracció en cap cas afecta les cotes màximes de les diverses oscil·lacions del nivell freàtic.
- Estudi d'Impacte i d'Integració Paisatgística ((EIIP) segons el que contempla el Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, i l'art. 49.b del Decret 1/2010, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (haurà d'ésser validat per la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, prèviament a la concessió de la llicència per part de l'Ajuntament).
- Estudi de qualitat acústica que verifiqui i reculli les mesures necessàries per al compliment de l'article 11.
- Anàlisi cost-benefici ambiental seguint els criteris de l'art. 2.17 del PTMB.
- Programa de restauració. Inclourà obligatòriament la determinació específica del tipus de materials de reblert i el percentatge admès de materials diferents dels determinats.
- Testimoni fefaent del títol de propietat dels terrenys on es vol fer l'extracció. Si el sol·licitant de l'autorització no és el propietari, s'acompanyarà amb el corresponent permís del propietari signat davant notari.

La memòria específica referida en el paràgraf anterior haurà de descriure i/o justificar els següents aspectes:

- L'abast de les activitats que es pretenen desenvolupar, assenyalant específicament els desmunts o terraplens previstos, i la delimitació màxima en planta i el volum de terra i roca que s'han de remoure i/o el volum d'àrids que s'hauran d'extreure'n. S'annexarà la delimitació de l'ocupació màxima de l'explotació, inclosos els espais necessaris per a instal·lacions fixes, moviments de vehicles i apilament de materials (coincident amb l'avaluació d'impacte ambiental) grafada sobre els plànols escala 1/1000 de l'ICC.
- Mesures correctores previstes prèvies a l'obertura (per tal de complir els condicionants establerts als anteriors articles d'aquest capítol) i durant l'explotació per tal d'ajustar els límits de l'impacte i de molèstia als establerts al CAPÍTOL 5 d'aquest TÍTOL.
- Descripció de l'estat en què quedarà el terreny un cop efectuada l'extracció i la restauració. S'annexaran perfils comparatius de l'estat Inicial i final.
- Durada prevista per a l'explotació i per a la seva restauració.

El procediment administratiu d'alorgament restarà en suspens fins que no es presenti la totalitat de la documentació que disposa aquest apartat.

b) Tramitació i fiscalitat

L'Ajuntament podrà imposar mesures correctores (barreres visuals, etc.), al marge de les corresponents a la restauració ambiental derivada de l'explotació de l'activitat.

Sens perjudici dels tràmits previstos per la legislació urbanística i les ordenances municipals per a la concessió de llicències, quan es tramiti la concessió d'una llicència urbanística relativa a una activitat extractiva l'àmbit de la qual es situï a menys de 1000 metres del límit del terme municipal, es donarà coneixement al municipi veí de la sol·licitud de l'inici del tràmit.

En aquesta comunicació es donarà un termini mínim d'un mes al municipi veí per presentar els seus informes prèviament a la concessió de la llicència.

A fi de facilitar el pagament de les taxes i l'Impost Municipal sobre construccions, instal·lacions i obres, la part d'aquests conceptes corresponent al moviment de terres es podrà esglaonar pagant cada any exclusivament la part corresponent als moviments de terra previstos en l'any. A tal efecte l'empresa explotadora presentarà al primer any un pla de labors que especifiqui el volum del moviment de terres previst en l'any, i anualment un pla de labors que inclogui la comparació entre volum el moviment de terres previst i el realitzat l'any anterior (justificat mitjançant aixecaments topogràfics de les situacions inicial i final), i el volum del moviment de terres previst en l'any següent.

En relación a la actividad extractiva debe indicarse que su nulidad es consecuencia de la nulidad anteriormente estimada de los artículos 3 y 6 último párrafo de la Normativa Urbanística al descenderse y concretarse ahora la solicitud y tramitación de la licencia e igualmente penetrándose en el ámbito de la titulación ambiental o en las sectoriales de su razón –para actividades extractivas y depósitos controlados de residuos-.

Por consiguiente igualmente **es nulo el artículo 16.a) y b) de la Normativa Urbanística.**

8.- Se impugna el artículo 17 de la Normativa Urbanística para depósitos controlados (sic) en cuanto dispone:

**artículo 17 Condiciones generales.**

✓ Només s'admetran dipòsits controlats en els espais corresponents a anteriors activitats extractives.

No s'admeten els dipòsits controlats en les àrees on no està permès obrir noves activitats extractives d'acord amb l'establert al CAPÍTOL 2 d'aquest TÍTOL.

En tot cas, per tal que es pugui determinar si un emplaçament concret és adequat o no per dipòsits controlats de residus, s'haurà de justificar en cada cas amb l'aportació del contingut establert l'annex 2 del Decret 1/1997 i a l'annex 1 del Real Decret 1481/2001.

**La nulidad del artículo 17** resulta de la falta de justificación del régimen limitativo establecido como se ha argumentado en el anterior apartado 2.

9.- Igualmente se impugnan los artículos 18 y 19, relativos a la

restauración de actividades extractivas mediante depósitos controlados (sic), estableciendo unas condiciones geológicas y ambientales del siguiente modo:

#### **article 18 Condicions geològiques**

No s'admet la restauració d'activitats extractives mitjançant qualsevol tipus de dipòsit controlat que:

- Puguin afectar a masses d'aigua subterrània, a zones de recàrrega o que suposi alteració d'altres sistemes hídrics.
- Tinguin una profunditat per sota del nivell freàtic.
- S'incloguin dins de zones de perillositat geològica d'acord amb l'annex de Geologia.

S'hauran de condicionar els terrenys per evitar riscos de contaminació sempre que es detectin materials granulars permeables (amín  $K > 10^{-6}$ ) per a procedir a la restauració mitjançant la implantació d'un dipòsit controlat.

En tot cas, la llicència urbanística reiterarà el compliment de les condicions que estableixi la corresponent autorització ambiental, tant en lo relatiu a les mesures correctores d'impermeabilització com les relatives a evitar qualsevol risc greu pel medi ambient

#### **article 19 Condicions ambientals**

No s'admet la restauració d'activitats extractives mitjançant cap tipus de dipòsit controlat si aquesta està emplaçada en el connector biològic establert pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona. La delimitació d'aquests espais es recull en el plànol P-2 d'aquest Pla Especial.

Amb el fi d'obtenir una correcta integració paisatgística i un menor impacte, el volum màxim d'un dipòsit de residus no haurà de superar per la seva part superior el major dels següents límits:

- la orografia natural del terreny abans de l'inici de l'activitat extractiva prèvia al dipòsit. A aquest efecte el sol·licitant de la llicència haurà d'aportar documentació gràfica que acrediti aquesta orografia. En cas contrari s'aplicarà el límit exposat al següent paràgraf.
- el pla teòric que conté els punts situats en la cota natural dels extrems i centre de la meitat del perímetre de cotes més elevades.

No s'admet la restauració d'activitats extractives mitjançant cap tipus de dipòsit controlat que afecti a cursos d'aigua o a qualsevol element ambiental sensible dels enumerats a article 11 d'aquesta normativa.

S'hauran de respectar en tot moment la legislació europea relativa a l'avaluació i gestió de la qualitat de l'aire ambient, i en conseqüència tenir en compte els condicionants que s'estableixen per a la Zona de Qualitat de l'aire 2 (Vallès-Baix Llobregat), per a la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric per les partícules PM10 i pel diòxid de nitrogen (NO<sub>2</sub>), segons els criteris de la Direcció general de qualitat ambiental.

Efectivamente en esos supuestos se trata de penetrar en el ámbito de los programas de restauración y de los depósitos controlados que, en esencia, reduplica su régimen a título de ordenación urbanística pero que ni se engarza debidamente con las correspondientes legislaciones sectoriales en materia extractiva y de depósitos controlados ni se detecta que el ordenamiento urbanístico dé cobertura a esa ordenación reduplicada o que obedezca a sus objetivos o finalidades.

Por consiguiente igualmente **son nulos los artículos 18 y 19 de la Normativa Urbanística.**

10.- Se impugna el artículo 22.a) y b) de la Normativa Urbanística para la restauración de las actividades extractivas (sic) del siguiente tenor:

**artículo 22 Llicència urbanística**

a) Sol·licitud

Sens perjudici de les previsions contingudes als articles 6 i 8 d'aquesta normativa, la restauració d'exploracions extractives mitjançant dipòsit controlat serà objecte d'una llicència urbanística independent i haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

- Memòria específica per a la sol·licitud de llicència urbanística que contempli els aspectes que s'enumeren al paràgraf segon d'aquest article.
- Plànol de situació que justifiqui el compliment de l'establert a l'article 19 i a l'O.
- Plànol de l'àmbit d'extracció.
- Plànol de l'estructura de la propietat, representant les finques registrals i cadastrals i els propietaris de cadascuna.
- Projecte de dipòsit controlat de residus (el mateix de la sol·licitud de l'autorització ambiental)
- Projectes d'obra de les instal·lacions fixes (amb descripció específica dels sistemes de sanejament) i de les intervencions en els accessos i recorreguts fins a les vies de

- comunicació supramunicipals mes properes que seran utilitzades per l'evacuació dels materials.
- Estudi geològic referent a les mesures correctores necessàries per evitar riscos, observant els criteris establerts en l'annex 2 del Decret 1/1997, i a l'annex 1 del Real Decret 1481/2001.
  - Estudi d'Impacte i d'Integració Paisatgística (EIIP) segons el que contempla el Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, i l'art. 49.b del Decret 1/2010, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (haurà d'ésser validat per l'Agència de Residus de Catalunya i pel Departament d'Indústria i energia de la Generalitat de Catalunya, prèviament a la concessió de la llicència per part de l'Ajuntament).
  - Programa de restauració. Inclourà obligatòriament la determinació específica del tipus de materials de coberta.
  - Testimoni fefaent del títol de propietat dels terrenys on es vol fer l'extracció. Si el sol·licitant de l'autorització no és el propietari, s'acompanyarà amb el corresponent permís del propietari signat davant notari.

La memòria específica referida en el paràgraf anterior haurà de descriure i justificar els següents aspectes:

- Tipus de residus admesos i percentatges màxims de materials no admesos.
- Delimitació màxima en planta i perfils, així com el volum màxim de residus a dipositar. S'annexarà la delimitació de l'ocupació màxima del dipòsit, inclosos els espais necessaris per a instal·lacions fixes, moviments de vehicles i apilament de materials (coincident amb l'autorització ambiental) grafada sobre els plànols escala 1/1000 de l'ICC.
- Mesures correctores previstes prèvies a l'obertura del dipòsit (per tal de complir els condicionants establerts als anteriors articles d'aquest capítol) i durant vida útil del dipòsit tal d'ajustar els límits de l'impacte i de molèstia als establerts al CAPÍTOL 5 d'aquest TÍTOL.
- Descripció de l'estat en què quedarà el terreny un cop efectuat el reblert. S'annexaran perfils comparatius de l'estat inicial i final.
- Durada prevista per al dipòsit de residus fins a la seva completa restauració.

b) Tramitació i fiscalitat

L'Ajuntament podrà imposar mesures correctores (barreres visuals, etc.), addicionals a les que proposi el projecte..

Sense perjudici dels tràmits previstos per la legislació urbanística i les ordenances municipals per a la concessió de llicències, quan es tramiti la concessió d'una llicència urbanística relativa a un dipòsit controlat l'àmbit de la qual es situï a menys de 1000 metres del límit del terme municipal, es donarà coneixement al municipi veí de la sol·licitud de l'inici del tràmit.

En aquesta comunicació es donarà un termini mínim d'un mes al municipi veí per presentar els seus informes prèviament a la concessió de la llicència.

A fi de facilitar el pagament de les taxes i l'Impost Municipal sobre construccions, instal·lacions i obres, la part d'aquests conceptes corresponent al moviment de terres es podrà esglaonar pagant cada any exclusivament la part corresponent als moviments de terra previstos en l'any. A tal efecte l'empresa explotadora presentarà el primer any un pla de treball que especifiqui el volum del moviment de terres previst en l'any, i anualment un pla de treball que inclogui la comparació entre volum el moviment de terres previst i el realitzat l'any anterior (justificat mitjançant aixecaments topogràfics de les situacions inicial i final), i el volum del moviment de terres previst en l'any següent.

En relación a la actividad extractiva debe indicarse que su nulidad es consecuencia de la nulidad anteriormente estimada de los artículos 3 y 6 último

párrafo de la Normativa Urbanística al descenderse y concretarse ahora la solicitud y tramitación de la licencia e igualmente penetrándose en el ámbito de la titulación ambiental o en las sectoriales de su razón –para actividades extractivas y depósitos controlados de residuos-.

Por consiguiente igualmente **es nulo el artículo 22.a) y b) de la Normativa Urbanística.**

11.- Se impugna el artículo 23 de la Normativa Urbanística referente a restauración de los depósitos controlados (sic) en cuanto dispone:

**article 23 Condicions de restauració**

Sense perjudici de les normatives específiques i sectorials sobre restauració, els projectes de restauració dels dipòsits controlats del terme de Rubí hauran de complir les prescripcions de l'article 15 d'aquesta normativa relatiu a la restauració d'activitats extractives, amb excepció de la referència als materials de roblert que es regularan d'acord amb els permisos específics del dipòsit controlat.

En relación a la actividad extractiva y su restauración vuelve a tener que señalarse que se trata de penetrar en el ámbito de los programas de restauración y de los depósitos controlados que en esencia reduplica su régimen a título de ordenación urbanística pero que ni se engarza debidamente con las correspondientes legislaciones sectoriales en materia extractiva y de depósitos controlados ni se detecta que el ordenamiento urbanístico dé cobertura a esa ordenación reduplicada o que obedezca a sus objetivos o finalidades.

Por consiguiente igualmente **es nulo el artículo 23 de la Normativa Urbanística.**

12.- De la misma manera se impugnan los artículos 29, 30, 31, 33 y 34 en sede de controles ambientales, mejora de la calidad del aire, controles del ciclo del agua y otros denominados controles en los siguientes términos:

**article 29 Control ambiental**

L'emissió de soroll durant el període d'explotació amidada en qualsevol punt del TM de Rubí, haurà de respectar Valors límits de Immissió en dB(A) establerts en el "Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos" així com el "Mapa de capacitat acústica del territori aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Rubí en data 6 de maig de 2014".

En els amidaments de nivells sonors que es facin no s'exclourà el so ambiental propi del sòl urbà (circulació habitual de vehicles). Quan hi hagi diverses fonts d'emissió soroll, els requeriments de reducció es faran simultàniament a totes les fonts d'emissió, a fi de prorratejar els límits permessos entre les diverses fonts.

L'Emissió de pols i d'altres elements contaminants durant el període d'explotació amidada en qualsevol punt del sòl Urbà de Rubí, haurà de respectar els límits d'immissió establerts en el "Reial decret 102/2011 de 28 de gener relatiu a la millora de la qualitat de l'aire" i les mesures del "Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig", -en particular, l'article 10-, en tant que permet un nivell de protecció circumstanciat a les activitats extractives.

En qualsevol cas es prendran les mesures per a la millora de la qualitat de l'aire que s'enumeren en l'article següent.

Quan hi hagi diverses fonts d'emissió de pols o altres elements contaminants, els requeriments de reducció es faran simultàniament a totes les fonts d'emissió, a fi de prorratejar els límits permessos entre les diverses fonts.

L'ajuntament efectuarà controls dels nivells d'immissió esmentats quan es produixin queixes dels veïns o de forma aleatòria. L'ajuntament podrà efectuar amb càrrec a l'empresa explotadora, un mínim de dos controls anuals d'emissió de sorolls, pols o d'altres contaminants en punts del sòl Urbà propers a l'explotació, sense previ avis. Aquesta condició es farà constar en la llicència urbanística.

En cas d'incompliment podrà imposar a l'empresa explotadora mesures correctores no previstes en la sol·licitud del permís.

**article 30 Obligacions per a la millora de la qualitat de l'aire**

L'empresa explotadora, a fi de garantir les millors condicions de la qualitat de l'aire, està obligada durant l'explotació a prendre les següents mesures correctores (recollides al "Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire 2007-2010 (mesura codi S124)")

**a) Pol que fa als accessos, vials de circulació i superfícies amb trànsit de vehicles, camions i maquinària:**

1. Pavimentar els vials des de la bàscula o les plantes de tractament fins a la sortida de la xarxa viària bàsica, i mantenir el fons en bon estat. Compactar els vials interns on la circulació de vehicles diària sigui superior a 6 camions, i mantenir-los en bon estat.
2. Limitar la velocitat màxima de circulació a 20 km/h per l'interior de l'explotació.
3. Limitar la velocitat de circulació a 40 km/h en el tram comprès entre l'explotació i la xarxa viària bàsica.
4. Aspirar i/o escombrar i/o fer ruixats amb aigua als vials amb una IMD igual o superior a 6 camions/dia.
5. Cobrir completament els materials transportats per vehicles i camions, abans de sortir del recinte de l'activitat.
6. Instal·lar dispositius de neteja dels vehicles, especialment de les rodes.
7. Revisar periòdicament els motors de combustió i els tubs d'escapament de la maquinària vehicles de transport.

- b) Pel que fa als apilaments de materials propis de l'activitat extractiva:
1. Instal·lar elements de protecció contra el vent.
  2. Optimitzar l'alçada dels apilaments i reduir les alçades de caiguda lliure, de manera que en cap cas aquests superin l'alçada dels elements físics de protecció contra el vent.
- c) Pel que fa a les operacions de càrrega, descàrrega i/o manipulació de materials pulverulents amb camions o maquinària en apilaments, tremuges i similars, tret del forn d'extracció:
1. Instal·lar sistemes per minimitzar l'emissió de partícules (aspiració localitzada de partícules, ruixat o similar).
- d) Planta i operacions de tractament:
1. Tots els elements fixes necessaris per al transport i tractament de material han de ser tancats, com ara lamisos, garbells, classificadors, cintes transportadores, elevadors de materials, punts de transferència i dispositius similars; han de disposar d'un grau de tancament adequat, han de reduir al màxim la grandària de les obertures i estudiar-ne l'orientació respecte dels vents dominants, de manera que en cap moment no es produeixin núvols de pols. A més, es poden complementar aquests sistemes amb dispositius de captació o sedimentació i vehiculació cap a sistemes de depuració.
  2. Els punts de descàrrega de les cintes transportadores als apilaments han de disposar d'elements de protecció contra el vent.

#### article 31 Obligacions respecte al cicle de l'aigua

Tant les activitats extractives com els dipòsits controlats han de complir durant tot el seu cicle de vida els següents condicionaments respecte a l'abastament d'aigua, l'avocament d'aigües residuals i respecte als cursos d'aigua:

- Han de regularitzar l'estat administratiu de l'aprofitament pel qual s'abasteixen (en cas de no disposar de la corresponent inscripció).
- El sistema de tractament de les aigües residuals de les activitats hauran de disposar de la corresponent autorització d'abocament.
- Pel que fa a la inundabilitat, qualsevol instal·lació o les seves activitats associades hauran de respectar l'establert en l'article 6, i la Disposició Transitòria Primera i Segona del Decret 305/2008 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
- Qualsevol actuació haurà de complir els "Criteris d'intervenció del espais fluvials" publicat pel l'Agència Catalana de l'Aigua.
- Per poder realitzar obres en zona de policia de lleres (100m), cal disposar de la corresponent autorització prèvia de l'ACA. En tot cas, s'estarà al previst als articles 52 a 54, 78 i 79 de RDPH.

#### article 33 Control de la restauració

Durant tot el període de restauració d'una activitat extractiva s'hauran de respectar els límits de control ambiental i de mobilitat establerts a l'article 29 i l'article 32 d'aquesta normativa, i l'ajuntament podrà efectuar els controls necessaris.

L'ajuntament efectuarà el control dels materials de reblert utilitzats mitjançant un laboratori homologat. A tal efecte l'ajuntament trametrà a l'empresa explotadora el programa de control que especificarà el nombre i volumetria de la presa de mostres, que es realitzaran sense previ avís i que l'empresa explotadora haurà de facilitar permetent l'entrada dels tècnics en el moment que es requereixi. L'empresa explotadora es farà càrrec dels costos del programa de control. Aquesta condició es farà constar a la llicència urbanística.

#### article 34 Controls addicionals dels dipòsits controlat.

Durant tot el període de reblert d'un dipòsit controlat fins que finalitzi el període de garanti posterior a la finalització de la restauració, l'emissió d'olors haurà de complir els límits màxim d'emissió i d'immissió que s'estableixen i descriuen en l'annex 1 d'aquesta normativa.

Este tribunal sigue entendiendo que improcedentemente para una titulación urbanística de tracto único o, si así se prefiere, no de tracto sucesivo, se ha tratado de involucrar una figura de planeamiento urbanístico en una serie de controles que solo tienen sentido jurídico en la órbita de las titulaciones ambientales o las sectoriales de actividades extractivas y de depósito de residuos de tal suerte que el ordenamiento urbanístico no da cobertura a esa ordenación ni con la misma se pueda suplantar o apartar de toda consideración la que proceda en la materia ambiental con su naturaleza, competencias, procedimientos, fuentes normativas y objetivos y finalidades de su razón.

Por consiguiente igualmente **son nulos los artículos 29, 30, 31, 33 y 34 de la Normativa Urbanística.**

13.- Finalmente se impugnan los artículos 35, 39 y 40 de la Normativa urbanística en cuanto establecen lo siguiente:

**artículo 35 Vigència i revisió de les llicències urbanístiques. Causes de caducitat.**

Les llicències urbanístiques a que es refereix aquest pla especial es revisaran cada quatre anys a fi de verificar i actualitzar les condicions d'exploració establertes al CAPÍTOL 5 del TÍTOL II d'aquesta normativa i imposar les mesures de control corresponents.

Són causes de caducitat de la llicència urbanística les següents:

- a) La falta d'inici dels treballs o les actuacions autoritzades en el termini de 6 mesos des de l'atorgament de la llicència.
- b) La paralització o absència d'activitat durant més de dos anys ininterromputs.

Si l'empresa explotadora comunica la paralització dels treballs d'extracció, o en el seu cas de dipòsit de residus, i té vigent l'autorització ambiental corresponent, per reiniciar-los s'aplicaran les condicions establertes al CAPÍTOL 5 del TÍTOL II d'aquesta normativa.

Si l'empresa explotadora comunica la paralització dels treballs d'extracció, o en el seu cas de dipòsit de residus, i no té vigent el títol habilitant corresponent, per reiniciar-los s'aplicaran les condicions establertes respectivament al CAPÍTOL 2 (per a llicències de nova implantació d'activitats extractives) o al CAPÍTOL 3 (per a llicències de nova implantació de dipòsits controlats) del TÍTOL II d'aquesta normativa.

**artículo 39 Activitats extractives i dipòsits controlats sense llicència urbanística en vigor**

Les activitats extractives que no disposin de llicència urbanística però sí disposen de permís de MINES i de llicència o autorització ambiental hauran de sol·licitar la llicència urbanística en el termini màxim de 24 mesos a partir de la data de publicació en el DOGC de l'aprovació definitiva del present Pla especial.

Els dipòsits controlats que no disposin de llicència urbanística però sí disposen de llicència o autorització ambiental i de l'Agència de Residus de Catalunya, hauran de sol·licitar la llicència urbanística en el termini màxim de 12 mesos a partir de la data de publicació en el DOGC de l'aprovació definitiva del present Pla especial.

L'exigència d'autorització per part de l'Agència de Residus de Catalunya serà d'aplicació per a aquelles activitats l'autorització ambiental de les quals hagi requerit el pronunciament favorable d'aquest organisme.

L'ajuntament respectarà en les condicions de la llicència la situació i delimitació i restauració establertes pel títol habilitant de l'activitat, però podrà exigir les mesures correctores necessàries per a garantir les condicions d'explotació establertes al CAPÍTOL 5 del TÍTOL II d'aquesta normativa. Seran aplicables totes les mesures de seguiment i control establertes en dit capítol.

L'aplicació d'aquest règim transitori no podrà comportar, en el tràmit de llicència urbanística, limitacions que resultin incompatibles amb els drets adquirits per la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 20 de gener de 2012 (recurs contenciós administratiu núm. 281/2011).

#### **article 40 Obligacions ambientals de les explotacions i dipòsits controlats existents**

Totes les explotacions extractives i els dipòsits controlats tindran l'obligació de complir les condicions de qualitat ambiental relatives a emissió de sons, pols i altres contaminants, olors, mobilitat establerts en aquesta normativa.

Aquestes obligacions s'implantaràn progressivament a fi de facilitar el seu compliment segons els terminis següents comptats a partir de la data de publicació en el DOGC de l'aprovació definitiva del present Pla especial.

- 0 mesos: Qualitat de terres de reblert per a la restauració (article 33).
- 6 mesos: Qualitat ambiental relativa a l'emissió d'olors (article 34).
- 12 mesos: Qualitat ambiental relativa a l'emissió de sons (article 29).
- 18 mesos: Qualitat ambiental relativa a l'emissió de pols i altres contaminants (article 30).
- 24 mesos: Impacte de la mobilitat (article 32).

L'ajuntament realitzarà el control de les explotacions extractives i dipòsits controlats amb títols habilitants en vigor, d'acord als anteriors terminis i es farà càrrec de les despeses dels esmentats controls.

La disconformidad a derecho y nulidad de los mismos radica en que la titulación urbanística en el régimen legal y reglamentario establecido no está sujeta a revisión cuatrienal por lo que sin cobertura jurídica es nulo el artículo 35. El régimen del artículo 39 descansa en la novedosa ordenación para las titulaciones habilitantes que sin cobertura urbanística arrastra su nulidad. Y de la misma manera las obligaciones ambientales que se adicionan en el artículo 40 siguen involucrándose sin cobertura en materia de actividades ambientales sin sujetarse al ordenamiento de esa naturaleza a título de ordenación urbanística que no les da ninguna cobertura jurídica.

Por consiguiente igualmente **son nulos los artículos 35, 39 y 40 de la Normativa Urbanística.**

Por todo ello habiendo tenido en cuenta hasta la doble línea sucesiva de impugnación de preceptos que sigue la parte actora –así hasta la página 96 de su

demanda y después de la página 97- y de los preceptos que se señalan en su suplico -- no necesariamente ajustados a las alegaciones de los fundamentos de derecho que ofrece- procede estimar el presente recurso contencioso administrativo en la forma y términos que se fijarán en la parte dispositiva.

**QUINTO.-** A los efectos de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998 en cuanto dispone que las costas se impondrán al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición, y atendida la estimación acaecida, sin que se aprecien méritos en contrario, procede condenar en costas a las partes recurridas si bien en atención a las circunstancias del asunto ya expuestas, la dificultad que comporta y la complejidad estéril en la que se ha involucrado el escrito de demanda con el límite por todos los conceptos de la parte recurrente en la cuantía de 1.000 € IVA incluido para cada parte recurrida, en total 2.000€.

### FALLAMOS

**ESTIMAMOS** el presente recurso contencioso administrativo interpuesto a nombre de las entidades **ARRINS, S.L.** y **GRUPO FSM VERTISPANIA, S.L.** contra el Acuerdo de 15 de diciembre de 2016 de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de la **GENERALITAT DE CATALUNYA** por virtud del que, en esencia, se mantuvo la suspensión de la tramitación del Plan Especial urbanístico para la creación de un sistema urbanístico destinado a infraestructura de gestión de residuos de Can Carreras y Can Balasch promovido por ARRINS, S.L. y GRUPO FSM VERTISPANIA, S.L. hasta el cumplimiento de determinadas prescripciones, del tenor explicitado con anterioridad, y **ESTIMAMOS LA DEMANDA ARTICULADA ESTIMANDO LA NULIDAD DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO IMPUGNADA Y EN CONCRETO SUS ARTÍCULOS 3 Y 6 ÚLTIMO PÁRRAFO, ARTÍCULO 7, ARTÍCULO 8, ARTÍCULO 16.A) Y B), ARTÍCULO 17, ARTÍCULOS 18 Y 19, ARTÍCULO 22.A) Y B), ARTÍCULO 23, ARTÍCULOS 29, 30, 31, 33 Y 34 Y ARTÍCULOS 35, 39 Y 40 DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA.**

Se condena en costas a las partes demandadas con el límite por todos los conceptos de la parte recurrente en la cuantía de 1.000 € IVA incluido para cada parte recurrida, en total 2.000€.

La presente Sentencia no es firme. Contra la misma cabe interponer, en su caso, recurso de casación de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª, Capítulo III, Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). El recurso deberá prepararse en el plazo previsto en el art. 89.1 LJCA.

Y, adviértase que en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación.

**Firme que sea la presente a los efectos del artículo 107.2 de nuestra Ley Jurisdiccional publíquese por la Administración Autonómica la parte dispositiva de la presente Sentencia en el Diario Oficial donde se publicó la aprobación definitiva de la figura de planeamiento de autos. Cúrsese el correspondiente oficio a la Administración Autonómica con acuse de recibo para que en el plazo de un mes desde la recepción del mismo haga constar en los presentes autos la publicación ordenada.**

Así por esta Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA  
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
SECCIÓN TERCERA**

RECURSO Nº: 238/2017

PARTES: ARRINS, S.L. Y GRUPO FSM VERTISPANIA, S.L.  
C/ GENERALITAT DE CATALUNYA Y AJUNTAMENT DE RUBI

**AUTO**

**Ilustrísimos Señores:**

**Presidente**

**D. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS.**

**Magistrados**

**D. FRANCISCO LÓPEZ VÁZQUEZ.**

**Dña. LAURA MESTRES ESTRUCH.**

A 14 de julio de 2020.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**UNICO.-** Solicitada subsanación del error padecido en la Sentencia recaída en los presentes autos mediante escrito de la parte actora de fecha 26/06/2020 procede dictar el presente Auto en el que ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don **Manuel Táboas Bentanachs..**

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

**UNICO.-** A los efectos del artículo 267.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, debe reconocerse que se ha padecido el error material en el Fallo de la Sentencia nº 1622, de 2 de junio de 2020, recaída en los presentes autos 238/2017 que se pasa a corregir en el presente Auto al resultar patente como resulta del tenor de la Sentencia en especial en su antecedente de hecho primero y fundamento jurídico primero. Sin Costas.

**PARTE DISPOSITIVA**

Ha lugar a corregir el error material cometido en la Sentencia nº 1622, de 2 de junio de 2020, recaída en los presentes autos 238/2017 en el sentido que en el fallo

donde dice:

“en esencia, se mantuvo la suspensión de la tramitación del Plan Especial urbanístico para la creación de un sistema urbanístico destinado a infraestructura de gestión de residuos de Can Carreras y Can Balasch promovido por ARRINS, S.L. y GRUPO FSM VERTISPANIA, S.L. hasta el cumplimiento de determinadas prescripciones”

debe decir:

"en esencia, se aprobó definitivamente el Plan Especial urbanístico de regulación de las actividades extractivas y de su restauración del municipio de Rubí.

Sin Costas.

Hágase saber que el presente Auto forma parte de la Sentencia referida y estése a su pie de recursos a computar desde la notificación del presente Auto.

Así por este Auto lo mandamos, pronunciamos y firmamos.



Concuerta bien y fielmente con su original al que me remito, y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente en Barcelona, a dos de marzo de dos mil veintidos

**Letrada de la Adm. de Justicia**



## DADES BÀSIQUES

|                       |  |                    |                     |
|-----------------------|--|--------------------|---------------------|
| Número d'assentament: | 0365 / 605 / 2022  | Data del document: | 02/03/2022          |
| Data presentació:     | 08/03/2022 13:10:46  | Data alta:         | 08/03/2022 13:10:46 |
| Assumpte:             | REFERENT AL RECURS CONTENCIOS ADMIN 238/2017 - A INSTANCIA DE ARRINS, SL I GRUPO FSM VERTISPANIA - DEVOLUCIO EXPEDIENT |                    |                     |
| Tipus de document:    | Ofici  | Diligències:       |                     |
| Documentació adjunta: | 5 documents  |                    |                     |
|                       | 1. Ofici – Original en paper – Digitalització segura (Id. digitalització: 0HYWLEZ8NEL1YPP9TIDSTFBBT90B71QD)            |                    |                     |
|                       | 2. AUTO – Original en paper – Digitalització segura (Id. digitalització: 0F4SN5DUJZWLJT3TUK1VIO50TXCOF8AJ)             |                    |                     |
|                       | 3. DECRET – Còpia en paper – Digitalització segura (Id. digitalització: 0K4508HQQZOUW4529B8WGPJZJF7QSPQ3)              |                    |                     |
|                       | 4. RECURS – Còpia en paper – Digitalització segura (Id. digitalització: 0M3YMP5DTENLUWUZ4M0G711FZEPM906TH)             |                    |                     |
|                       | 5. SENTENCIA – Còpia en paper – Digitalització segura (Id. digitalització: 0GF8UQ15D2T95SW3JVJTXFBMA383C7MC)           |                    |                     |

## PROCEDÈNCIA

|                           |   |                       |               |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------|
| Via de presentació:       | Correu certificat   | Tipus de procedència: | Administració |
| Nom, 1r Cognom, 2n Cognom |   |                       |               |
| Organisme:                | Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (2000743)<br>PODER JUDICIAL<br>Pg. de Lluís Companys, 14-16 (Palau de Justícia)<br>08018 Barcelona |                       |               |
| Descripció:               |   |                       |               |
| Població procedència:     | 080193 Barcelona (Barcelonès)   |                       |               |

## DESTINACIÓ

|                      |  |
|----------------------|--|
| <u>Interna:</u>      | Servei de Recursos i Reclamacions (3462)<br>Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori<br>Av. de Josep Tarradellas, 2-6<br>08029 Barcelona |
| <u>Externa:</u>      |  |
| Població destinació: | 080193 Barcelona (Barcelonès)  |

## EXPLOTACIÓ

|                 |                     |                  |            |
|-----------------|---------------------|------------------|------------|
| Classificació:  | Número d'expedient: |                  |            |
| Vol. acarament: | Annexos:            | Annexos lliurats | Núm. pàg.: |
| Suport físic:   | Paper               | <u>LDA:</u> Sí   | Urgent: Sí |
| Observacions:   |                     |                  |            |